

Señores:

JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MANIZALES

admin03ma@cendoj.ramajudicial.gov.co

REFERENCIA: ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
RADICADO: 17001-33-33-003-2019-00577-00
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA
DEMANDANTES: YESID RODRIGO SUAZA TORRES Y OTRO
DEMANDADOS: DEPARTAMENTO DE CALDAS Y OTROS
LLAMADO EN GTÍA.: ALLIANZ SEGUROS S.A. Y OTROS

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No.19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado de **ALLIANZ SEGUROS S.A.**, mediante el presente escrito procedo a **REASUMIR** el poder a mi conferido en el proceso de la referencia, y a presentar dentro del término legal, los **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**; solicitando desde ya, se profiera sentencia favorable a los intereses de mi representada, negando las pretensiones de la demanda por no demostrarse la responsabilidad administrativa que se pretendía endilgar al **DEPARTAMENTO DE CALDAS** y a mi prohijada, con fundamento en los siguientes argumentos que concretaré en los acápites siguientes.

CAPÍTULO I. OPORTUNIDAD.

Mediante Auto Interlocutorio No. 1323 del 12 de noviembre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales declaró cerrada la etapa probatoria y en consecuencia corrió traslado por el término común de diez (10) días hábiles para que las partes presenten sus alegatos de conclusión por escrito, cuyo decurso inició el día 13 de noviembre de 2024 y fenece el día 26 de noviembre de la misma anualidad. De manera que, el presente escrito se radica en la oportunidad procesal respectiva.

CAPÍTULO II. FRENTE A LO PROBADO EN LA DEMANDA

A. RESULTÓ PROBADA LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Según la demanda, el 28 de octubre de 2017, el señor Yesid Rodrigo Suaza, resultó lesionado al caer desde su propia altura a causa de un charco de agua en el piso de las instalaciones del coliseo menor Ramón Marín Vargas de la ciudad de Manizales, en donde se llevaba a cabo el “Torneo IRT Internacional de Ajedrez Clásico” que celebraba los 70 años de la Liga Caldense de Ajedrez. Del cual presuntamente el Departamento de Caldas era uno de los organizadores. Por lo tanto, alega que se causó un daño antijurídico por parte del ente territorial demandado. Sin embargo, en el proceso se demostró que el Departamento de Caldas no era el responsable, ni

tuvo a su cargo la organización, ni siquiera fue patrocinador o promotor del encuentro deportivo. Por ende, no es posible endilgarle responsabilidad sobre los perjuicios reclamados.

Con respecto a la legitimación en la causa por pasiva, el Consejo de Estado ha señalado que:

“Es un presupuesto procesal derivado de la capacidad para ser parte. Es una facultad que le asiste a una persona, sea natural o jurídica, para ostentar dicha calidad y, por ende, formular unas pretensiones atinentes a hacer valer un derecho subjetivo sustancial o contradecirlas y oponerse a ellas. El artículo 100 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión expresa consagrada en el artículo 306 del C.P.A.C.A., prevé las excepciones previas como medios de defensa del accionado encaminados a dilatar la entrada a juicio. Su condición de previas o dilatorias resulta de la falta de capacidad para enervar por completo la pretensión principal del actor; por lo tanto, su constitución no aniquila el derecho subjetivo sustancial que se pretende hacer valer en el proceso, pero sí obliga a que el demandante subsane las inconsistencias presentadas, pues de otro modo impedirán la continuación del trámite del asunto. Entre las mencionadas excepciones se encuentra la de falta de legitimación en la causa por pasiva, la cual se configura por la falta de conexión entre la parte demandada y la situación fáctica constitutiva del litigio; así, quienes están obligados a concurrir a un proceso en calidad de demandados son aquellas personas que participaron realmente en los hechos que dieron lugar a la demanda”¹

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que la legitimación en la causa por pasiva constituye un presupuesto procesal que exige una conexión directa entre la parte demandada y los hechos que originan el litigio. Únicamente pueden ser vinculados al proceso quienes tienen una participación real y efectiva en los acontecimientos que motivan la reclamación.

Bajo ese entendido, en el caso concreto quedó plenamente probado que el Departamento de Caldas no era el responsable del evento. Se acreditó que la entidad territorial, no tuvo a cargo la organización del torneo, así como tampoco actuó como patrocinador o promotor del evento deportivo. Al respecto se incorporaron al expediente las siguientes documentales:

- Resolución No. 0002 de fecha 23 de agosto de 2017 “*por la cual se reglamenta el TORNEO IRT OPEN MAYORES AJEDREZ CLÁSICO “70 AÑOS” LIGA CALDENSE DE AJEDREZ, a realizarse del 13 al 16 de Octubre de 2017 en la ciudad de Manizales*” suscrita únicamente por el Presidente de la Liga Caldense de Ajedrez, en la cual no se menciona aval o patrocinio por parte del Departamento de Caldas para su realización.
- Contrato No. 07122016-0834, suscrito por el Departamento de Caldas, vigente desde el 2 de diciembre de 2016 hasta el 31 de agosto de 2017, y cuyo objeto correspondía en: “*APOYAR A LA LIGA CALDENSE DE AJEDREZ PARA LA PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS Y EN EL DISEÑO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y*

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 21 de septiembre de 2016, Exp. (51514).

EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE ENTRENAMIENTO PARA LOS DEPORTISTAS DE ESTA DISCIPLINA DEPORTIVA”

- Respuesta a derecho de petición con radicación No. 113-2019-ER-0000042 Caso No. 16122 de fecha 22 de noviembre de 2019, suscrita por la Gobernación de Caldas y dirigida al señor Yesid Rodrigo Suaza Torres, en donde se informa que: **“El Departamento de Caldas – Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física no apoyo el evento deportivo señalado en la petición. En dicha fecha no se tenía contrato de apoyo vigente con la Liga Caldense de Ajedrez.”** Además, se aclara que: **“No existió participación del Departamento de Caldas – Secretaría de Deporte, Recreación y Actividad Física en la ejecución del evento deportivo señalado”** y **“... se desconocen las razones por las cuales en la publicidad del evento haya quedado algún logo de la entidad como patrocinadora o participante del mismo.”** (Énfasis propio)

Los elementos probatorios aportados revelaron la total desvinculación del ente territorial demandado en el “Torneo IRT Internacional de Ajedrez Clásico” en el que participo el señor Yesid Rodrigo Suaza. La documentación acreditó que entre el Departamento de Caldas y la Liga Caldense de Ajedrez no existía para la fecha del evento, contrato vigente de organización. Tampoco se logró probar la existencia de un convenio específico de patrocinio o cualquier tipo de compromiso contractual para el desarrollo del evento deportivo.

La mera presencia ocasional o inclusión eventual de un logo institucional, sin respaldo documental o contractual, no constituye *per se* un elemento que configure responsabilidad del Departamento, como lo pretende hacer ver la parte demandante. Los medios de prueba demostraron de manera inequívoca que el Departamento de Caldas no participó en la organización del evento, carecía de control sobre las instalaciones cuya propiedad son del Municipio de Manizales, no tenía injerencia en el desarrollo del torneo y no mantenía una relación contractual vigente con la Liga de Ajedrez para el momento del incidente.

Además, se resalta, que la Liga Caldense de Ajedrez tiene personería jurídica propia e independiente del Departamento de Caldas. Como institución sin ánimo de lucro, posee una naturaleza jurídica diferenciada que le permite gestionar sus propios recursos, asumir responsabilidades legales independientes, suscribir contratos y convenios, y organizar eventos deportivos con absoluta autonomía administrativa y financiera.

Lo que permite concluir de manera inequívoca la ausencia de legitimación en la causa por pasiva del Departamento de Caldas, pues no tuvo ningún tipo de participación, control, responsabilidad ni injerencia sobre el torneo de ajedrez y las instalaciones donde ocurrieron los hechos que presuntamente causaron las lesiones al señor Yesid Rodrigo Suaza. Siendo imposible imputarle responsabilidad sobre los hechos ocurridos, ya que la entidad no omitió ningún deber legal, ni contractual, así como tampoco realizó alguna acción que causara las lesiones del demandante.

B. DENTRO DEL PROCESO NO SE DEMOSTRÓ LA RESPONSABILIDAD ATRIBUIBLE AL DEPARTAMENTO DE CALDAS – NO SE LOGRÓ ACREDITAR EL NEXO DE CAUSALIDAD

De acuerdo con los hechos objeto del presente litigio, la parte actora alega la existencia de una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas. Específicamente sobre el Departamento de Caldas, señala que como supuesto organizador del "Torneo IRT Internacional Ajedrez Clásico" se omitieron procesos de validación para garantizar el cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad que protegieran la vida e integridad de los deportistas participantes. Además, argumenta que no se constituyeron las pólizas necesarias para cubrir los posibles riesgos inherentes a la ejecución del evento deportivo. Sin embargo, el material probatorio recaudado en el proceso demuestra de manera contundente que no existió omisión alguna que pudiera constituir causal de responsabilidad del Departamento de Caldas, dado que no participó de ninguna manera en la organización y/o ejecución del torneo, y tampoco incumplió con obligaciones legales o contractuales.

Al respecto, lo primero que hay que tener presente es que, el régimen subjetivo de responsabilidad – además de ser el postulado general- le impone a la parte demandante la carga probatoria, por lo que es esta quien debe tener el comportamiento activo en la aportación del material que soporta los supuestos de hecho y demostración de los mismos. Como bien se puede apreciar dentro del presente proceso, no existe prueba alguna que permita estructurar los elementos de la responsabilidad que pretende atribuírsele al Departamento de Caldas.

Según las condiciones en que se presentaron los hechos objeto de la presente demanda y lo aportado al proceso, no obra prueba alguna que estructure la atribución de daño a la entidad demandada, por lo que no se tiene certeza frente al incumplimiento obligacional que refiere la parte actora fue el factor determinante de la causación del lamentable accidente –y consecuentemente, haya generado los supuestos perjuicios-. Ante la inexistencia de estos elementos, no se configura responsabilidad patrimonial en cabeza del Estado. En igual sentido, tampoco se prueba que esta haya incumplido con sus obligaciones administrativas. Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido:

“Al tenor del artículo 90 de la constitución Política, quien pretenda el resarcimiento patrimonial de un daño, por parte del Estado, debe probar que sufrió afectación en un bien jurídicamente tutelado, pero, además, demostrar que dicha afectación es antijurídica, y que le es atribuible a aquel por causa de la acción u omisión de las autoridades públicas. De esta forma la norma constitucional en comento, esboza el trazado de la estructura de la responsabilidad patrimonial del Estado con integración de los tres elementos que de antaño se reconocen como indispensables y necesarios para que se predique de un sujeto que es patrimonialmente responsable: el daño, el hecho que lo genera y el nexo de causalidad que permite la imputación fáctica y jurídica al sujeto activo del daño. La atribución de responsabilidad pende, entonces, de esa relación causal que denota la fórmula constitucional cuando alude al daño que tiene causa en la acción u omisión de las autoridades públicas (...)”².

² Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 19 de noviembre de 2021, Exp. (52814)

Bajo el régimen subjetivo de responsabilidad, corresponde a la parte demandante la carga probatoria de demostrar los supuestos de hecho que fundamentan su reclamación. Por el contrario, en este caso, la documentación aportada evidencia la inexistencia de cualquier vínculo del Departamento de Caldas con el torneo de ajedrez. Además, se reitera que la mera mención o eventual inclusión de logos institucionales no configura responsabilidad administrativa, siendo indispensable acreditar una participación efectiva y directa en la organización del evento.

De acuerdo al Contrato No. 07122016-0834, la Liga Caldense de Ajedrez contaba con el apoyo departamental hasta el 31 de agosto de 2017, es decir aproximadamente dos meses antes de la ocurrencia del accidente del señor Yesid Rodrigo Suaza. Así mismo, en la respuesta dada al demandante mediante oficio con radicado No. 113-2019-ER-0000042 del 22 de noviembre de 2019, quedó claro que el Departamento de Caldas tampoco fue patrocinador o promotor del torneo. Por lo tanto, no tenía obligación legal, contractual o de patrocinio que implicara la realización de procesos de validación para garantizar requisitos mínimos de seguridad de los deportistas participantes. Así mismo, carecía de responsabilidad para constituir pólizas que cubrieran riesgos inherentes a la ejecución del evento deportivo, dado que no existía nexo jurídico con la Liga Caldense de Ajedrez para el torneo, no ejercía control sobre las instalaciones y no intervenía en la gestión del encuentro deportivo. Estas obligaciones correspondían exclusivamente a la Liga Caldense de Ajedrez como organizadora directa del evento, siendo inaplicable cualquier pretensión de atribuir responsabilidad al Departamento de Caldas.

En ese orden, es claro que la hipótesis sobre la cual el extremo actor sustenta principalmente sus pretensiones no constituye, de ninguna manera, una prueba que tenga relevancia en el derecho y que sirva para la imputación que aquí se pretende. Es de absoluta importancia recordar que un señalamiento sin pruebas que permita irrefutablemente respaldarlo, en nada y bajo ninguna circunstancia, constituye un juicio por el que pueda atribuirse responsabilidad, sin que antes sean efectivamente corroborados los mismos. En otras palabras, es fundamental que la parte actora logre acreditar de manera fehaciente los elementos requeridos para estructurar la responsabilidad que pretende atribuir a los demandados, situación que claramente la demandante no logra demostrar.

Las pruebas que obran en el expediente se fundamentan en la acreditación del daño correspondiente a las lesiones o patología que sufre el señor Yesid Rodrigo Suaza y no en la imputación. Por esto, ni siquiera indiciariamente podrían servir probatoriamente para realizar un juicio casual y así atribuir responsabilidad a las entidades demandadas, debido a que, como se sustentó en el acápite anterior, se configuraron los supuestos del caso fortuito, lo cual altera la causalidad e impide que se estructuren los elementos de la responsabilidad para imputar el daño a las demandadas.

Lo anterior, se debe a que el apoderado actor debe probar los elementos estructurales de la responsabilidad, que en materia administrativa son el daño y la imputación. Estos dos elementos estructurales nunca se presumen y deben estar debidamente acreditados por la parte actora. Sin embargo, como se analizó, el juicio realizado por el demandante para atribuir la causa del daño

fue indebido, pues, en primer lugar, no soportó su argumento en las pruebas que debió haber aportado al proceso, y en segundo, no es cierto que el Departamento de Caldas haya intervenido en la producción del daño.

Se concluye que una vez acreditado que no existe causalidad material ni jurídica, al no configurarse uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, no hay fundamento para declarar la misma y en consecuencia condenar a las demandadas, ni a mi representada.

C. SE DEMOSTRÓ LA CONFIGURACIÓN DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA COMO CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD DE LOS DEMANDADOS

De acuerdo con los hechos de la demanda, el 28 de octubre de 2017, el señor Yesid Rodrigo Suaza, resultó lesionado al caer desde su propia altura a causa de un charco de agua en el piso de las instalaciones del coliseo menor Ramón Marín Vargas de la ciudad de Manizales, en donde se llevaba a cabo el “Torneo IRT Internacional de Ajedrez Clásico” del cual era participante. No obstante, se omite que el accidente fue consecuencia directa de su actuar determinante e imprudente, pues omitió tomar las medidas de protección necesarias para su desplazamiento, más aún, considerando sus patologías y el uso de muletas para su movilidad.

Para dar sustento a la presente causal eximente, se debe tener en cuenta lo abordado por el Consejo de Estado, de la siguiente manera:

“En cuanto a la alegada eximente de responsabilidad consistente en el hecho exclusivo de la víctima, conviene recordar que, al igual que acontece con las demás eximentes de responsabilidad fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado, Por otra parte, a efectos de que operen las citadas eximentes de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de la víctima tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.”³

Según la historia clínica obrante en el expediente, el señor Yesid Rodrigo Suaza, estaba diagnosticado con “SARCOMA ÓSEO DE TIBIA PROXIMAL IZQUIERDO, CAMBIO TOTAL DE RODILLA IZQUIERDA. HEPATITIS B”. Además, los testimonios escuchados en audiencia de pruebas celebrada el 18 de septiembre de 2024, confirmaron que el señor Suaza requería del uso de muletas para su desplazamiento, y específicamente el día de los hechos, 28 de octubre

³ Consejo de Estado, Sentencia del 26 de mayo de 2021, Rad. 05001233100020020443702 (45558)

de 2017, las estaba utilizando. También confirmaron que se desplazaba por el lugar sin acompañamiento o personal de apoyo

La condición de salud compleja que presentaba el demandante implicaba una limitación significativa de movilidad, necesidad de soporte adicional para desplazamiento y el riesgo incrementado de caídas o accidentes que no se tuvieron en cuenta por su parte. Dado que el señor Suaza conocía su condición física particular, debía adoptar medidas de autocuidado y tenía la obligación de extremar precauciones durante su desplazamiento

Los medios probatorios documentan de manera fehaciente que el demandante no implementó las medidas de precaución razonablemente exigibles a una persona con sus limitaciones físicas, siendo este factor determinante en la ocurrencia del incidente.

En suma, se dan los presupuestos fácticos y normativos para que se pruebe la excepción de hecho exclusivo y determinante de la víctima, pues están probadas y analizadas sus características. Siendo evidente que la víctima fue quien provocó su propio daño al conocer de sus limitaciones de movilidad y no tomar precauciones para evitar o disminuir el riesgo de caída. Por lo tanto, es quien deberá asumir las consecuencias de su comportamiento y no atribuirlo al Departamento de Caldas, ni a la llamada en garantía, dado que con la configuración de esta casual de exoneración se rompe por completo el nexo causal entre el daño y la imputación.

D. QUEDÓ PROBADA LA IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS SOLICITADOS POR LA PARTE DEMANDANTE.

De acuerdo a lo probado en el plenario, se logró evidenciar que no existe responsabilidad frente al Departamento de Caldas, sobre los hechos de la demanda, ni mucho menos en contra de mi prohijada, por cuanto no se integró por la parte actora los medios de pruebas fehacientes para demostrar la causación de los perjuicios alegados. Las pruebas recaudadas no otorgan una convicción real sobre la producción, naturaleza, y de la cuantía del supuesto detrimento patrimonial irrogado, el cual, al no ser objeto de presunción, no puede ser reconocido sin mediar pruebas fehacientes de su causación. Además, los perjuicios que se solicitan en la demanda no fueron debidamente acreditados por la parte actora, quien deliberadamente manifiesta que, por la supuesta conducta omisiva de las aquí demandadas, y de la llamada en garantía se les produjo un perjuicio irremediable a los demandantes sin tener las pruebas fehacientes para señalar la configuración del daño. Así las cosas, se presentan los siguientes argumentos de lo probado dentro del proceso.

1. Perjuicios morales

Los demandantes pretenden el reconocimiento de perjuicios morales en favor del señor Yesid Rodrigo Suaza por valor de 100 SMLMV y en favor de la señora Aura Isabel Torres por valor de 50 SMLMV, por las afectaciones causadas con la ocurrencia de los hechos el 28 de octubre de 2017. Conforme al criterio de la Jurisdicción Contencioso Administrativa Colombiana, el daño moral debe ser acreditado por quien lo invoca, so pena del rechazo de su pretensión, pues la

prueba de dicho perjuicio, se establece por medio de la construcción de una presunción judicial, a partir de la valoración del indicio del parentesco como hecho conocido.

Al respecto es necesario aclarar que la aplicación de la anterior presunción no genera ningún efecto en la carga de la prueba regulada en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen", y que, tratándose de responsabilidad del Estado se entiende que para que el Juez declare que el Estado debe responder patrimonialmente será necesario que el demandante acredite un daño antijurídico y que este sea imputable al Estado por acción u omisión. Sin embargo, los valores solicitados por concepto de perjuicio moral no cuentan con ningún respaldo probatorio, pues según los lineamientos establecidos por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el porcentaje de indemnización debe ser proporcional a la gravedad de las lesiones. Esto se demostraría con un dictamen de pérdida de capacidad laboral realizado al señor Yesid Rodrigo Suaza, pero el mismo es inexistente.

Por lo tanto, el despacho no puede desconocer la omisión de la carga probatoria en cabeza de la parte demandante de un precepto que alegó dentro del proceso pero que no fue probado pues la parte demandante no allegó ni solicitó la práctica del dictamen de calificación de la Junta de Calificación de Invalidez, el cual permitiría tasar la gravedad de sus lesiones y aplicar la presunción.

2. Daño a la salud

Con respecto al daño a la salud la parte demandante pretende la suma indemnizatoria de 50 SMLMV en favor del señor Yesid Rodrigo Suaza, la cual no puede ser reconocida por el despacho. En primer lugar, dado que no es posible establecer una relación de causalidad entre la ocurrencia del evento y los supuestos perjuicios reclamados. Además, en concordancia con los argumentos anteriores el valor pretendido es desproporcional y no se sustenta en ninguna prueba que lo acredite.

Frente a dicho perjuicio, es necesario precisar que el mismo, se repara con base en dos componentes: (i) uno objetivo, el cual está determinado por el porcentaje de invalidez; y, (ii) uno subjetivo, que puede permitir incrementar o disminuir en determinada proporción el primer valor, conforme a las consecuencias particulares y específicas. Al respecto se ha establecido:

“[P]or lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el porcentaje de invalidez decretado por el médico legista.

De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, sino que el

daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada.”

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que no debe reconocerse dicho perjuicio, pues no existe un documento que acredite la gravedad de las lesiones que permita tasar una adecuada indemnización.

3. Perjuicios materiales

Con relación a la petición encaminada como perjuicio material, se plantea en el escrito de la demanda que por dicho concepto se debe reconocer una suma total de 50 SMLMV. Sin embargo, no hay prueba que permita conceder un perjuicio de esta naturaleza pues no se evidencia que la víctima lesionada haya dejado de percibir sus ingresos. El Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente, que el Lucro Cesante se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de los perjudicados o víctimas indirectas. En el presente caso, es evidente la falta de prueba del perjuicio, por lo tanto, no cabe una indemnización por dicho concepto.

Sin embargo, se reitera que es evidente que no se avizoran en el expediente pruebas que acrediten o expliquen cómo es que el Departamento de Caldas ha sido el generador de los perjuicios cuya indemnización se demanda, cuando no tuvo responsabilidad en la conducta generadora del supuesto daño que se pretenden endilgar y por cuanto dichos perjuicios fueron desvirtuados, por lo cual se insiste al despacho respetuosamente que niegue las pretensiones de la demanda.

CAPÍTULO III. ANÁLISIS FRENTE A LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

A. NO SE PROBÓ LA MATERIALIDAD, NI REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, POR LO TANTO, NO ES EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA DE ALLIANZ SEGUROS S.A.

La Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1002446 cuyo tomador y asegurado es la Gobernación de Caldas, se pactó con una vigencia desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017 y con el objeto de: *“cubrir los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de la responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la ley colombiana, por lesiones o muerte a personas y/o destrucción de bienes, lucro cesante, daño emergente, daño moral, fisiológico y a la vida relación, causados durante el giro normal de las actividades del asegurado”*. Sin embargo, en el expediente ciertamente no está demostrada la responsabilidad que pretende el extremo activo endilgar, dado que el

Departamento de Caldas no era el responsable, ni siquiera promovió o patrocinó el torneo de ajedrez en el que resultó lesionado el demandante.

De conformidad con lo anterior, se evidencia que el riesgo asegurado en el contrato de seguros en comento no es otro que la “Responsabilidad Civil Extracontractual” en que incurra el asegurado de acuerdo con la legislación colombiana. Dicho de otro modo, el contrato de seguro documentado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1002446 entrará a responder, si y solo sí el asegurado, es declarado patrimonialmente responsable por los daños irrogados a “terceros” y siempre y cuando no se presente una causal de exclusión u otra circunstancia que enerve los efectos jurídicos del contrato de seguro. Así las cosas, esa declaratoria de responsabilidad Civil Contractual constituirá el “siniestro”, esto es, la realización del riesgo asegurado (Art. 1072 del C.Co.).

En ese orden de ideas, Allianz Seguros S.A. no está obliga a responder, de conformidad con las obligaciones expresamente estipuladas y aceptadas por las partes en el contrato de seguro. Según lo probado, el Departamento de Caldas no está llamado a responder en el presente proceso, por lo tanto, el riesgo asegurado no se estructuró. En ese mismo sentido los hechos y pretensiones de la demanda carecen de cobertura bajo la póliza de seguro utilizada como fundamento del llamamiento en garantía, pues no se cumplió la condición a la que está sometida la obligación de la aseguradora, esto es, que se realice el riesgo asegurado en los términos del contrato de seguro.

De acuerdo con la exposición anterior y teniendo en cuenta todos los medios probatorios aportados al plenario, se tiene que el demandante no acreditó que efectivamente el riesgo asegurado se haya materializado por el concurso de los elementos propios de la responsabilidad y, por consiguiente, las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar. En consecuencia, no se logra estructurar una responsabilidad civil en cabeza del asegurado, esto es, no se realiza el riesgo asegurado como condición sine qua non para activar la responsabilidad que, eventual e hipotéticamente, pudiera corresponder a la aseguradora.

Se concluye, que al no reunirse los supuestos para que se configure la responsabilidad civil, claramente no se ha realizado el riesgo asegurado por la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1002446 que sirvió como sustento para llamar en garantía a mi representada. En tal sentido, no surge obligación indemnizatoria alguna a cargo de Allianz Seguros S.A.

B. NO PUEDEN DESCONOCERSE LAS EXCLUSIONES DE AMPARO PACTADAS EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1002446

Es importante que el despacho tenga en cuenta que, en caso de que por su parte se considere procedente declarar la responsabilidad de los perjuicios sufridos por los demandantes en cabeza del Departamento de Caldas, no le corresponderá a Allianz Seguros S.A. asumir la obligación indemnizatoria por concepto de daño moral y lucro cesante pretendido con la demanda. Pues

estos riesgos están expresamente excluidos del amparo de responsabilidad civil extracontractual. El condicionado general de la Póliza específicamente menciona que:

“3. EXCLUSIONES

AXA COLPATRIA QUEDARÁ LIBERADA DE TODA RESPONSABILIDAD BAJO EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO CUANDO SE PRESENTEN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES HECHOS O CIRCUNSTANCIAS:

(...)

D. DAÑO MORAL QUE SE CAUSE A CUALQUIER TERCERO DAMNIFICADO

(...)

V. EL LUCRO CESANTE, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE POR ESCRITO.”

En este punto se debe tener como referente que la Superintendencia Financiera de Colombia, ha desarrollado el tema incluso desde el año 1996 a través de la Circular 007, donde indico:

“1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones).

Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada”.

Posteriormente en la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, de la referida entidad, se reafirmó la postura realizando una regulación de la emisión de las pólizas y del contenido que estas debían tener, así:

“1.2.1. Requisitos generales de las pólizas de seguros: Para el adecuado cumplimiento de lo señalado en el numeral 2 del art. 184 del EOSF las entidades aseguradoras deben redactar las condiciones del contrato de forma que sean claramente legibles y que los tomadores y asegurados puedan comprender e identificar las definiciones de los riesgos amparados y las obligaciones emanadas del negocio celebrado. Para ello, las pólizas deben incluir, cuando menos, la siguiente información:

1.2.1.1. En la carátula:

1.2.1.1.1. Las condiciones particulares previstas en el art. 1047 del C.Co.

1.2.1.1.2. En caracteres destacados o resaltados, es decir, que se distingan del resto del texto de la impresión, el contenido del inciso 1º del art. 1068 del C.Co. Para el caso de los seguros de vida, el contenido del art. 1152 del mismo ordenamiento legal.

1.2.1.2. A partir de la primera página de la póliza (amparos y exclusiones)

Los amparos básicos y todas las exclusiones que se estipulen deben consignarse en forma continua a partir de la primera página de la póliza. Estas deben figurar en caracteres destacados o resaltados, según los mismos lineamientos atrás señalados y, en términos claros y concisos que proporcionen al tomador la información precisa sobre el verdadero alcance de la cobertura contratada. No se pueden consignar en las páginas interiores o en cláusulas posteriores exclusiones adicionales en forma distinta a la prevista en este numeral”. (Negrilla fuera de texto)

La regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, es completamente clara, pues indica que los amparos y exclusiones deben consignarse a partir de la primera página de la póliza, esto es, no de forma restrictiva en la carátula de la misma, puesto que, por razones prácticas, por imposibilidad física, y por las indicaciones legales referidas, no es viable que confluyan en esta misma página del contrato de seguro. De hecho, la misma Superfinanciera a través de su Dirección Legal dio respuesta a consulta formulada por el Representante Legal de Liberty Seguros el pasado 04 de febrero de 2020⁴, conceptuando lo siguiente:

“Bajo esta línea de interpretación, debe entenderse que en aquellos casos en que en consideración al número de amparos y sus respectivas exclusiones, así como la necesidad de ofrecer una descripción legible, clara y comprensible de los mismos, no sea susceptible incorporar todos estos conceptos en una sola página, pueden quedar, tanto los primeros como las segundas, consignados en forma continua a partir de la primera página de la póliza, como lo precisa la instrucción de este Supervisor.”

Es preciso enfatizar que la Superintendencia Financiera de Colombia, es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tiene por objeto supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

Conforme a lo anterior, y a su clara condición de organismo estatal regulador de la actividad financiera y aseguradora, que por tanto ejerce la supervisión de manera idónea, es que el Decreto 2739 de 1991, en su artículo 3.3, estableció como una de sus funciones, la siguiente:

“Emitir las órdenes necesarias para que las entidades sujetas a la inspección, Vigilancia y control de la Superintendencia suspendan de inmediato las prácticas ilegales, no autorizadas o inseguras, y para que se adopten las correspondientes medidas correctivas y de saneamiento”.

De acuerdo entonces a la función pública que realiza esta entidad es claro que sus conceptos y las circulares que expide tienen un fin orientador, claramente de carácter vinculante, no siendo coherente que expida una circular que vaya en desmedro de los intereses de los asegurados, tomadores o beneficiarios en el contrato de seguro.

⁴ Superintendencia Financiera de Colombia, Radicación No. 2019153273-007-000, trámite: Consultas específicas, remitente: 334000 – DIRECCIÓN LEGAL DE SEGUROS, firmado por Luz Elvira Moreno Dueñas, Director Legal de Seguros

En conclusión, resulta evidente que Allianz Seguros S.A no debe responder por los perjuicios morales y lucro cesante reclamados en la demanda en razón de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. Dado que el presente caso dichos riesgos no se encuentran cubiertos por el contrato de seguro.

C. QUEDÓ PROBADO QUE LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE ALLIANZ SEGUROS S.A. NO PUEDE EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1002446

En gracia de discusión, sin que implique reconocimiento de responsabilidad, debe destacarse que la eventual obligación de mi procurada se circunscribe en proporción al límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato. En el caso en concreto para la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1002446, se establecieron los siguientes límites:

AMPAROS CONTRATADOS	VALOR ASEGURADO	LIMITE POR EVENTO
R.C.E. GENERAL (PREDIOS , LABORES Y OPERACIONES) Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	4,000,000,000.00	0.00
R.C. CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	800,000,000.00	350,000,000.00
R.C. VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	700,000,000.00	350,000,000.00
R.C. PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	700,000,000.00	350,000,000.00
R.C.E. CONTAMINACION Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	4,000,000,000.00	0.00
GASTOS MEDICOS	100,000,000.00	30,000,000.00
R.C.E. PARQUEADEROS Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	700,000,000.00	350,000,000.00
R.C. CRUZADA Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	700,000,000.00	350,000,000.00
BIENES BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL Deducible: 10.00 POR CIENTO SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA	4,000,000,000.00	0.00

Como se puede observar el amparo de “PREDIOS LABORES Y OPERACIONES” se pactó con un valor asegurado de \$4.000.000.000 el cual se encuentra sujeto a la disponibilidad de la suma asegurada. Dicho valor se encuentra sujeto a la ocurrencia de varios siniestros durante la vigencia de la póliza, que van agotando la suma asegurada.

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 1079 del Código de Comercio: *“El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”*. Así mismo, las condiciones determinadas en el contrato de seguros son obligaciones contraídas por la Compañía aseguradora exclusivamente expresadas en su texto, las cuales por ningún motivo se podrán desconocer.

Por lo tanto, en el remoto evento de que prosperaren una o algunas de las pretensiones de la demanda, debe tenerse en cuenta que el despacho no podrá condenar a mi representada a pagar una suma mayor a la asegurada. De ninguna manera el demandante podrá obtener una compensación más allá del límite de la suma asegurada indicada en la carátula de la póliza tomada por el Departamento de Caldas, siendo el límite máximo de responsabilidad de la compañía por todos los daños y perjuicios causados por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia del seguro.

D. QUEDÓ PROBADO QUE LA EVENTUAL OBLIGACIÓN DE ALLIANZ SEGUROS S.A. SE LIMITA AL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE DE ACUERDO CON EL COASEGURO PACTADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1002446

La póliza utilizada como fundamento para vincular a mi representada como llamado en garantía, revela que la misma fue tomada por la Gobernación de Caldas bajo la figura de coaseguro, distribuyendo el riesgo entre las compañías aseguradoras, así: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. con el 40%, SEGUROS DEL ESTADO S.A. con el 30% y ALLIANZ SEGUROS S.A. con el 30%. En ese sentido, existiendo un coaseguro, es decir, estando distribuido el riesgo entre mi representada y las compañías de seguros mencionadas, la responsabilidad de cada una de las coaseguradoras está limitada al porcentaje antes señalado, pues de ninguna manera puede predicarse una solidaria entre ellas.

Lo anterior, tiene fundamento en el artículo 1092 y 1095 del Código de Comercio, el cual establece referente al Coaseguro, lo pertinente:

“Artículo 1092: En el caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad.”

“Artículo 1095: Las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro”.

De la misma manera en reiterada Jurisprudencia el Consejo de Estado, se ha pronunciado sobre la inexistencia de solidaridad entre coaseguradoras, así:

“La jurisprudencia ha reconocido que en casos de coaseguro se responde en proporción a la cuantía que se asumió, sobre todo en el caso en que ello se pacte expresamente. De hecho, ha indicado que en casos de coaseguro el riesgo, entonces, es dividido en el número de coaseguradores que participan del contrato, en las proporciones que entre ellos dispongan, sin que se predique solidaridad entre ellos”⁵

Atendiendo a lo establecido en el Código de Comercio, se concluye que ni siquiera en el improbable caso de que fueran viables las pretensiones de la parte actora podría condenarse en su totalidad a mí representada, por lo que les corresponde a las otras coaseguradoras soportar la indemnización en proporción al porcentaje asumido. Lo anterior, como quiera que en el coaseguro las compañías aseguradoras no son solidarias, debido a que cada asegurador deberá soportar la indemnización, en proporción a la cuantía de su participación porcentual.

⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de julio de 2021, Exp. 54460

E. SE DEMOSTRÓ QUE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1002446 SE PACTÓ CON UN DEDUCIBLE A CARGO DEL ASEGURADO

En la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1002446, se estipuló adicionalmente la existencia de un deducible, el cual legalmente está permitido consagrado en el artículo 1103 del Código de Comercio, así:

“(…) Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original (…)”

Por otra parte, y de acuerdo con la normatividad vigente, la Superintendencia Financiera de Colombia en Concepto No. 2019098264 del 29 de agosto de 2019, ha sido clara en definir en qué consiste el deducible indicando lo siguiente:

“…Sin embargo, es preciso señalar que en nuestro ordenamiento jurídico no existe disposición que obligue al asegurador a indemnizar conforme a determinado régimen específico, en consecuencia, sea que la incapacidad o la lesión se acredite en las formas mencionadas en su comunicación, la fijación del monto de la indemnización se rige por las estipulaciones que al respecto hubieren pactado el tomador y el asegurador.

Dicho esto, en una póliza donde se ampara la responsabilidad civil extracontractual el monto de la indemnización puede verse disminuido si las partes han pactado que un porcentaje de la pérdida se asumirá a título de deducible por el asegurado, convenio que resulta legalmente viable, de acuerdo con nuestro ordenamiento mercantil.

En efecto, la Sección I del Capítulo II, Título V, Libro Cuarto del Código de Comercio, en su artículo 1103, consagra dentro de los principios comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar, mediante cláusulas especiales, que el asegurado “...deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño”.

Una de tales modalidades, la denominada deducible, se traduce en la suma que el asegurador descuenta indefectiblemente del importe de la indemnización, de tal suerte que en el evento de ocurrencia del siniestro no indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o de una proporción de la suma asegurada, con el objeto de dejar una parte del valor del siniestro a cargo del asegurado. El deducible, que puede consistir en una suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, se estipula con el propósito de concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo asegurado.

Por tanto, el valor del ofrecimiento extendido por la compañía aseguradora, podría variar en función de los perjuicios sufridos por el reclamante, así como los elementos probatorios que se hubieren allegado para acreditar el valor de la pérdida, conforme lo presupuestado en el artículo 1077 del código de comercio, aunado a las condiciones generales y particulares

pactadas en la póliza, como lo son el límite del valor asegurado, el deducible pactado con el asegurado, entre otros factores.”

En ese sentido, sin aceptar responsabilidad alguna y a modo ilustrativo, debe tenerse en cuenta, que el deducible, el cual corresponde a la fracción de la pérdida que debe asumir directamente y por su cuenta el Departamento de Caldas como asegurado, para el caso que nos ocupa se estableció en el 10% del valor total de la pérdida. Esto significa que, en caso de que el asegurado sea condenado en el presente proceso, deberá cubrir dicho valor, mientras que a la aseguradora le correspondería cubrir el saldo restante. En otras palabras, si se llegara a atribuir responsabilidad al Departamento de Caldas este debería hacer frente al porcentaje de deducible mencionado, dejando a la aseguradora la responsabilidad de cubrir el remanente de la pérdida.

F. PAGO POR REEMBOLSO

Sin perjuicio de reconocimiento de responsabilidad por parte de nuestro asegurado, en el remoto e hipotético caso en que se produzca una sentencia condenatoria y se decida afectar el contrato de seguro, la compañía aseguradora solo estaría en la obligación de responder bajo la figura del reembolso, teniendo en cuenta que el Departamento de Caldas, es el tomador de la Póliza. Por tal motivo, una vez el asegurado, proceda con el pago a los demandantes, de allí se desprendería la obligación de la compañía de reembolsarle lo pagado, atendiendo las particularidades de la póliza, en especial, el límite y sublímite asegurado, coaseguro y el deducible pactado.

CAPÍTULO IV. PETICIÓN

En mérito de lo expuesto, de manera respetuosa, ruego:

PRIMERO: Negar todas y cada una de las pretensiones de la demanda, declarando probadas las excepciones de fondo y mérito presentadas por **EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. Y ALLIANZ SEGUROS S.A.**, y en consecuencia se absuelva a mi representada a pago alguno por conceptos de indemnizaciones por los supuestos perjuicios alegados.

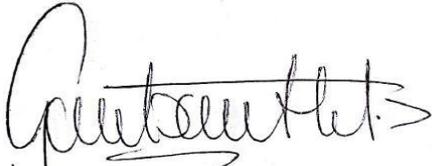
SEGUNDO: En el remoto evento en que los argumentos esbozados en el presente escrito no fueran de su convencimiento, no pierda de vista las limitaciones sobre la cobertura de las pólizas con fundamento en la cual **EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.** llamó en garantía a mi representada, esto, de conformidad con las consideraciones expuestas por mi defendida desde la contestación del llamamiento en garantía y reiteradas en esta oportunidad procesal.

CAPÍTULO V. NOTIFICACIONES

A la parte actora y a los convocados, en las direcciones consignadas en los escritos de demanda y contestaciones de la misma.

Al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100 oficina 212 de la Ciudad de Cali (V), correo electrónico: notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.